



Asamblea General

Distr. general
9 de marzo de 2020

Original: español

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 85º período de sesiones, 12 a 16 de agosto de 2019

Opinión núm. 43/2019, relativa a Amaya Eva Coppens Zamora (Nicaragua)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 33/30.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 9 de mayo de 2019 al Gobierno de Nicaragua una comunicación relativa a Amaya Eva Coppens Zamora. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

* El voto particular (parcialmente disidente) de Sètondji Roland Adjovi figura en el anexo de la presente opinión.



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Amaya Eva Coppens Zamora es una ciudadana nicaragüense y belga nacida en octubre de 1994, defensora de derechos humanos y líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de León, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. También es estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León.

Antecedentes

5. La fuente indica que la Sra. Coppens Zamora participó en las protestas contra las reformas del Gobierno a la seguridad social y el sistema de pensiones en Nicaragua. El 18 de abril de 2018, ella y otros manifestantes fueron presuntamente perseguidos y golpeados por la policía y por grupos progubernamentales.

6. El 20 de abril de 2018, los estudiantes universitarios comenzaron a manifestarse en reacción a la violenta represión que supuestamente tuvo lugar los días anteriores en León y Managua. Se señala que la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos y atacó a los manifestantes. Los estudiantes se refugiaron en la catedral de León. La Sra. Coppens Zamora estaba con ellos, pero después del sitio de la catedral, un grupo de activistas la acompañaron a su casa, antes del incendio del Centro Universitario de la Universidad Nacional.

7. Según la información recibida, la Sra. Coppens Zamora desde entonces participó en las protestas estudiantiles contra la policía y la represión gubernamental. Cuando se fundó el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, la Sra. Coppens Zamora se convirtió en una de sus líderes y portavoz.

8. El 4 de mayo de 2018, la Sra. Coppens Zamora fue a Managua para denunciar la expulsión de varios estudiantes con becas de internado. Supuestamente se les dijo a los estudiantes que perderían sus becas si no se unían a grupos progubernamentales. Muchos se negaron y como consecuencia perdieron sus becas. Esta fue la primera aparición pública de la Sra. Coppens Zamora como líder del movimiento estudiantil.

9. La fuente informa que, a lo largo del mes de mayo de 2018, el movimiento estudiantil organizó varias manifestaciones dentro de la universidad y en las calles de la ciudad. El 30 de mayo de 2018, la Sra. Coppens Zamora leyó la declaración del movimiento durante la marcha del día de las madres, en apoyo a quienes perdieron a sus hijos durante las protestas y la represión de los días anteriores.

10. El 12 de junio de 2018, asociaciones de estudiantes, movimientos sociales, líderes empresariales y periodistas decidieron convocar una huelga en la ciudad de León. La Sra. Coppens Zamora leyó la declaración del movimiento estudiantil a favor del paro.

11. Según la información recibida, la represión en León se intensificó con las protestas e incluía el uso de unos llamados “camiones de la muerte”, que transportarían a hombres armados y enmascarados a través de la ciudad para aterrorizar a la población. Como reacción a estos “camiones de la muerte”, los estudiantes y muchas otras personas de León comenzaron a construir “tranques” para evitar que los camiones ingresaran a los vecindarios. Estos tranques fueron desmantelados en ataques violentos de grupos paramilitares y policías, especialmente durante la llamada “operación limpieza”.

12. La Sra. Coppens Zamora habría participado como portavoz y manifestante activa en todas las acciones civiles, también en la elaboración de los “tranques”, en coordinación con otros habitantes de la ciudad de León. La fuente especifica que la Sra. Coppens Zamora no estuvo en posesión de arma de fuego en ninguna de estas manifestaciones.

13. Según la fuente, desde las primeras semanas de mayo, la Sra. Coppens Zamora y muchos otros líderes estudiantiles en el país tuvieron que abandonar su hogar para protegerse de la persecución y las amenazas. Estaba sujeta a crecientes intimidaciones, especialmente desde julio; el resto de su familia también empezó a recibir amenazas.

14. La fuente alega que la criminalización de los líderes estudiantiles y los ataques dirigidos a estos se convirtieron en un patrón visible de represión, especialmente desde junio. A finales de agosto, varios líderes del movimiento estudiantil fueron detenidos, como por ejemplo tres estudiantes que fueron capturados el 25 de agosto de 2018. Ese día, la Sra. Coppens Zamora, como portavoz del movimiento estudiantil, pidió su liberación.

Detención y etapa inicial del proceso

15. La Sra. Coppens Zamora fue detenida, junto a un compañero, el 10 de septiembre de 2018, aproximadamente a las 17.00 horas, en la ciudad de León, durante una redada a una vivienda ubicada en el barrio de la iglesia la Recolectión. La detención fue ejecutada por alrededor de 20 individuos armados vestidos de civil, muchos de ellos encapuchados, junto con policías uniformados, quienes no presentaron ninguna orden de arresto.

16. Según la fuente, la policía habría indicado en ese momento que los detenidos estaban siendo capturados en flagrancia con un arma de fuego y municiones. Sin embargo, los testigos de la redada afirman no haber visto que la policía se llevara ningún arma de la casa. No se presentó orden de captura o de allanamiento en el momento de la detención, ni se comunicó la detención a los abogados ni a la familia hasta el día siguiente. La familia no fue oficialmente notificada del arresto, sino que se enteraron al día siguiente por otros estudiantes que formaron parte del movimiento.

17. La Sra. Coppens Zamora y su compañero fueron trasladados en un camión a la casa departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional y luego a la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, en Managua. No tuvo contacto con su familia ni con un abogado durante toda su estadía. La fuente señala que luego trascendió que la Sra. Coppens Zamora habría sido golpeada durante los interrogatorios.

18. Conforme a la información recibida, en el acta de detención se indica que la Sra. Coppens Zamora fue detenida in fraganti por el delito de posesión ilegal de arma. En el recibo de ocupación se señala que, entre otras cosas, se le encontró a la Sra. Coppens Zamora un arma de fuego tipo pistola calibre 25 con su cargador que contenía ocho proyectiles, una caja pequeña con 13 cartuchos para escopeta, un celular y varios billetes de dinero en moneda local y extranjera. Dicho recibo alega que los objetos incautados estaban vinculados a un hecho de terrorismo, lesiones y portación ilegal de arma.

19. No obstante, la fuente indica que, aunque el recibo de ocupación fue escrito el 10 de septiembre de 2018, los documentos fueron firmados por los oficiales de evidencias el 12 y 13 de septiembre. La familia y el abogado de la Sra. Coppens Zamora solo fueron notificados de su detención el 11 de septiembre, por miembros del movimiento estudiantil. Durante los siguientes nueve días, la Sra. Coppens Zamora permaneció privada de libertad bajo régimen de incomunicación, por lo que no se le permitió comunicarse con su abogado ni con su familia.

20. El 12 de septiembre de 2018, la Sra. Coppens Zamora fue señalada públicamente en los medios de comunicación cuando la policía anunció cargos en su contra. Un portavoz de la policía leyó las acusaciones preliminares, incluida su supuesta participación en incendios el 20 de abril de 2018, de los delitos de terrorismo, portación ilegal de armas y otros.

21. Se señala que a partir del 12 de septiembre de 2018, y todavía sin haber tenido ningún contacto con su abogado, o haber sido llevada ante un juez, las autoridades le imputaron los delitos de terrorismo, portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, secuestro simple y lesiones graves, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos (artículos 394, 401, 163, 152, 224 y 327 del Código Penal), por hechos

que supuestamente ocurrieron el 20 de abril de 2018, el 23 de mayo de 2018, el 3 de junio de 2018 y el 10 de septiembre de 2018.

22. La fuente añade que el procedimiento del juicio contra la Sra. Coppens Zamora sigue un patrón similar al que ya se ha observado en casos de otros líderes reconocibles de las protestas, líderes estudiantiles y de otros movimientos: fueron arrestados sin ninguna orden judicial, presentados ante un juez después del plazo legalmente establecido, y sin que sus abogados ni sus familias fueran informados de las audiencias.

23. Por otro lado se indica que, a pesar de ser de la competencia del Juzgado de Distrito Penal de León, las audiencias se llevan a cabo en los juzgados de Managua. La fuente señala que, para tener acceso a las audiencias, las familias deben esperar en el juzgado hasta que las notificaciones orales o las sesiones informales tengan lugar en la sala de audiencias, diez minutos antes de la diligencia. Se trata de la única ocasión en la que se les permite ingresar en la sala de audiencias.

24. El 18 de septiembre de 2018, a las 11.40 horas, durante la primera comparecencia de la Sra. Coppens Zamora ante un tribunal, solo se permitió a su padre entrar y hablar con ella durante cinco minutos, por primera vez desde la detención. Su abogado no pudo estar allí para su primera audiencia debido a una confusión.

25. El 20 de septiembre de 2018, a las 4.00 horas, la Sra. Coppens Zamora fue trasladada al penitenciario de mujeres La Esperanza donde, en el momento en el que la fuente envió su información, se encontraba bajo régimen de prisión preventiva.

26. Según la información recibida, el 10 de octubre de 2018, en la audiencia inicial, el abogado defensor presentó una excepción por falta de competencia y por vicios en el debido proceso contra los actos procesales que fueron practicados antes de que el abogado asumiera la defensa, en contradicción con las garantías mínimas de todo procesado, incluido el derecho a no ser sustraído de su juez natural. Según la fuente, la legislación nacional dicta que, si la detención y los delitos imputados ocurrieron en León, el proceso judicial es de la competencia del Juzgado de Distrito Penal de León, no de Managua. El abogado también solicitó hacer pública la audiencia, de conformidad con la ley.

27. El 17 de octubre de 2018, en la audiencia pública para resolver la excepción, el juez habría rechazado todas las solicitudes de la defensa para transferir su caso a otra jurisdicción, también negó que sus audiencias fueran abiertas al público. La Sra. Coppens Zamora debió permanecer en la cárcel y la siguiente audiencia de juicio oral fue programada para el 10 de diciembre de 2018.

28. El 26 de octubre de 2018, la Sra. Coppens Zamora y sus compañeras de celda habrían sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de 25 custodios. Según indica la fuente, los supuestos hechos ocurrieron cuando la directora del centro convocó a una de las compañeras de celda para hacerle una “entrevista”. Sin embargo, al ella no acceder, 25 custodios vestidos de negro y encapuchados habrían procedido a golpearla “salvajemente” con bastones.

29. De acuerdo a la información recibida, las detenidas serían castigadas por indisciplina, dejándolas fuera de sus celdas, haciéndoles requisas ilegales, quitándoles sus pertenencias entre las cuales se incluían comida, perfumes y cosméticos, dejándolas desnudas y obligándolas a hacer sentadillas, y sin presuntamente tener acceso a luz natural durante un mes. El 11 de noviembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la Sra. Coppens Zamora y sus compañeras de celda.

30. En la información recibida se denuncia que se reprogramaron las audiencias intencionalmente por parte de las autoridades para confundir a la defensa. Este fue el caso de la audiencia del 10 de diciembre de 2018, que fue reprogramada para el 3 de enero de 2019. La audiencia y el inicio de la sentencia estaban programadas para el 28 de febrero de 2019, pero fue reprogramada para el 1 de abril de 2019 y, a finales de marzo, la fecha fue cambiada de nuevo, uniéndose así el caso a los juicios de otros presos políticos que fueron arrestados poco después.

31. De acuerdo a la información suministrada, en enero de 2019 una delegación de eurodiputados fue a las cárceles de El Chipote y de La Esperanza en el marco de una visita

al país. Se reunieron con la Sra. Coppens Zamora y otras detenidas en La Esperanza, donde pudieron averiguar y difundir las difíciles condiciones de detención en que se encontraban las presas. Se alega que, como respuesta a las críticas que hicieron las presas contra el Gobierno ante la delegación europea, algunas compañeras de celda de la Sra. Coppens Zamora fueron víctimas de represalias violentas por parte de los custodios.

32. Entre el 25 de febrero y el 13 de marzo de 2019, la Sra. Coppens Zamora, junto con otras compañeras de celda, empezó una huelga de hambre como forma de protesta ante las condiciones bajo las que estaban recluidas en el recinto penitenciario La Esperanza, y contra el aislamiento al que permanecía sometida una compañera periodista. Iniciaron la huelga de hambre el mismo día que comenzaron las negociaciones para superar la crisis entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En ese contexto, las huelguistas indicaron que se sentían como piezas en el tablero donde jugaban los que tenían el control político y económico. La huelga se suspendió el 13 de marzo, pero no de forma permanente.

33. En el momento en el que la fuente envió su información, la Sra. Coppens Zamora seguía detenida en el Penitencinario Integral de Mujeres La Esperanza. Se alega que se encontraba en condiciones crueles como por ejemplo la falta de atención médica, la carencia de condiciones básicas de detención y el hecho de compartir su celda con otras 14 mujeres. Las mujeres se encontraban en condición de vulnerabilidad en la cárcel, señalaron abusos de autoridad y agresiones físicas y psicológicas reiteradas por parte de los custodios.

34. Se informa que no les respetaban sus días de visita, que debían ser cada 15 días según el reglamento del régimen de prisión preventiva, pero únicamente se les concedían cada 21 días. Durante dichas visitas normalmente había dos o tres custodios cerca vigilando. Por otro lado, se indica que la comida era inadecuada y, debido a la ubicación del centro penitenciario cerca de una zona volcánica, el agua tenía altas concentraciones de sulfuro.

35. A pesar de que la Sra. Coppens Zamora desarrolló problemas de salud, el acceso a atención médica fue bastante limitado; además, no le permitían el acceso a medicamentos para la presión arterial. Por otro lado, los daños psicológicos tampoco eran desestimables.

36. Asimismo, se señala que, por su doble nacionalidad, la Sra. Coppens Zamora ha tenido un trato levemente preferencial. Por ejemplo, al contrario de otras detenidas, le han proporcionado consultas médicas irregulares en la cárcel por sus problemas de presión arterial. Sin embargo, solo el juez ha tenido acceso al reporte o diagnóstico médico, ni el abogado ni sus padres fueron informados sobre su estado de salud.

Alegatos de la fuente

37. De conformidad con la queja presentada por la fuente, la detención de la Sra. Coppens Zamora sería arbitraria por carecer de una base legal (categoría I); por ser el resultado del ejercicio de sus derechos y libertades protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos (categoría II); por la falta de observancia de las normas internacionales relativas a un juicio justo (categoría III); así como porque la detención está basada en razones discriminatorias (categoría V).

38. La fuente alega que el arresto y la detención de la Sra. Coppens Zamora constituyen un caso ilustrativo del patrón de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en el marco de las protestas pacíficas que empezaron el 18 de abril de 2018. La represión brutal de los ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno se acompañó de amenazas, campañas de hostigamiento y desprestigio en contra de defensores de derechos humanos, sacerdotes, estudiantes, periodistas y otros participantes que han apoyado las protestas.

39. Se indica que los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han señalado que, entre el 18 de abril de 2018 y enero de 2019, más de 325 personas han sido asesinadas; más de 2000, heridas; más de 700, detenidas (809 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), muchas de ellas torturadas, y 300 profesionales de la salud han sido despedidos.

40. En este contexto, se alega que desde de que empezó la crisis sociopolítica en abril de 2018, la Sra. Coppens Zamora, defensora de derechos humanos y líder del movimiento estudiantil, ha visto violados sus derechos fundamentales a la libertad de asociación, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, garantizados en los artículos 12, 19, 20, 21 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 del Pacto.

41. Se reitera que, el 10 de septiembre de 2018, la Sra. Coppens Zamora fue detenida en la ciudad de León por alrededor de 20 individuos armados vestidos de civil, muchos de ellos encapuchados como paramilitares, junto con policías uniformados. Los agentes e individuos armados no presentaron una orden de arresto ni de allanamiento.

42. Se indica que el artículo 95 del Código Procesal Penal establece que los detenidos tendrán derecho a comunicarse con sus familiares en las tres horas siguientes a partir de su detención, y a ser informados sobre las causas de la misma. En el caso de la Sra. Coppens Zamora, ni el abogado ni la familia fueron notificados de su detención hasta el día siguiente. Durante los nueve días posteriores, la Sra. Coppens Zamora fue recluida en El Chipote bajo régimen de incomunicación, pues no se le permitió comunicarse con su abogado ni con su familia. El artículo 256 del Código Procesal Penal garantiza la presentación ante el juez dentro de las 48 horas de su detención, lo cual también fue violado, dado que la audiencia preliminar se realizó el 18 de septiembre de 2018, una semana después de la detención.

43. Asimismo, se reclama que en el proceso se han dado violaciones de los derechos constitucionales y no han sido aseguradas las garantías del debido proceso, como las necesarias para la defensa, el derecho a un proceso imparcial e independiente ni el principio de presunción de inocencia. El artículo 2 y el párrafo final del artículo 95 del Código Procesal Penal disponen que toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente y como tal deberá ser tratada en todo momento del proceso, lo anterior es ratificado por la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 34, numeral 1.

44. Se alega que, en el caso de la Sra. Coppens Zamora, tanto el principio constitucional como lo ordenado en el Código Procesal Penal han sido violentados por las autoridades, tanto del aparato del Poder Judicial, como de los órganos del Poder Ejecutivo (Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional y Sistema Penitenciario), al haber sido tratada como si ya hubiera estado condenada cuando procedimentalmente no se había iniciado un juicio oral y público. El hecho de exponerla y exhibirla ante el mundo, a través de los medios oficialistas del Gobierno, como una delincuente, denigrando su reputación e infringiendo la presunción de inocencia, viola las disposiciones de los artículos 26, numeral 3, y 34 de la Constitución, que establecen que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación, y a las garantías mínimas del debido proceso, respectivamente.

45. Adicionalmente, se denuncia que el proceso se llevaba en Managua, a pesar de que los hechos imputados y el arresto tuvieron lugar en la ciudad de León. Esto constituye una sustracción del derecho a un juez natural, en violación, sobre todo, del artículo 34, numeral 2 de la Constitución y al artículo 22, numeral 1 del Código Procesal Penal. No se le permitían visitas de su abogado y ni la Sra. Coppens Zamora, ni su familia, fueron informadas debidamente de su proceso y acusación. La audiencia de juicio oral y público, inicialmente prevista para el 10 de diciembre de 2018, aún no había tenido lugar a la fecha de la presentación de la queja, habiendo sido reprogramada más de tres veces.

46. Se indica, además, que el caso fue declarado de tramitación compleja, lo cual duplica los tiempos procesales. Por otro lado, sometía a la discrecionalidad de la Policía Nacional y el Ministerio Público la duración de la investigación, lo cual habría podido aplazar el proceso entre seis meses y un año, o más.

47. Desde el 20 de septiembre de 2018 hasta la fecha de recepción de estas alegaciones, la Sra. Coppens Zamora se encontraba en la cárcel de mujeres La Esperanza, todavía bajo régimen de prisión preventiva. Las condiciones de detención eran violatorias de los artículos 3, 5 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto, artículo 95 de la Constitución y artículo 4 del Código Penal, entre otros. Se han reportado agresiones físicas y psicológicas por parte de custodios, falta de atención médica, visitas restringidas y carencia de condiciones de detención básicas.

Respuesta del Gobierno

48. El 9 de mayo de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno, en el marco de su procedimiento regular. El Grupo de Trabajo le solicitó al Gobierno que proporcionase información detallada sobre el caso de la Sra. Coppens Zamora, antes del 8 julio de 2019, y que clarificara las bases legales que justifican la detención, así como la compatibilidad de esta con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo también pidió al Gobierno que asegurara la integridad de la Sra. Coppens Zamora.

Deliberaciones

49. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno en el presente caso. El Gobierno no solicitó una extensión del plazo para contestar. Ante la falta de respuesta del Gobierno a la comunicación presentada por la fuente, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

50. El Grupo de Trabajo tuvo conocimiento de que en junio de 2019 fueron liberadas 56 personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, entre las que se encontraba la Sra. Coppens Zamora, a partir de la adopción de la Ley de Amnistía en Nicaragua¹. No obstante la puesta en libertad y en tanto la Ley de Amnistía no pareciera eliminar los registros penales de las personas liberadas, así como porque el presente caso parece ilustrar una situación generalizada de detenciones en Nicaragua, el Grupo de Trabajo, conforme al párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, analizará el carácter arbitrario o no de la privación de libertad de la Sra. Coppens Zamora.

51. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones². En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

Categoría I

52. El Grupo de Trabajo ha señalado que toda persona debe ser informada desde el momento de su detención de los motivos de la misma³, así como de la vía judicial para impugnar la ilegalidad de la privación de la libertad⁴. Las razones de la detención deben comprender el fundamento legal, así como los hechos que sirvieron para la denuncia y el acto ilícito cometido. Se entiende que esas razones son las causas oficiales de la detención y no las motivaciones subjetivas del agente que la realiza⁵.

53. Además, para el Grupo de Trabajo las personas detenidas tienen derecho a que se les informe por parte de la autoridad, en el momento de la detención, de su derecho a contar con un abogado de su elección⁶. De la misma manera, las personas tienen derecho a ser notificadas sin demora de las acusaciones formuladas en su contra⁷.

¹ Ley de Amnistía núm. 996, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2019, publicada en *La Gaceta Diario Oficial*, núm. 108 del 10 de junio de 2019.

² A/HRC/19/57, párr. 68.

³ Artículo 9, párr. 2, del Pacto.

⁴ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 7 (Derecho a ser informado).

⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014) sobre libertad y seguridad personales, párr. 25.

⁶ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 9 (Asistencia letrada y acceso a la asistencia jurídica).

⁷ Artículo 9, párr. 2, del Pacto.

54. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha encontrado que una persona es detenida en flagrancia cuando es privada de la libertad durante la comisión de un delito o inmediatamente después, o bien es arrestada durante la persecución en caliente, momentos después de que el supuesto crimen se haya cometido⁸.

55. Por otro lado, en opinión del Grupo de Trabajo, la detención en régimen de incomunicación restringe los derechos a acceder a un abogado de su elección, comparecer sin demora ante autoridad judicial, así como a recurrir ante un juez la legalidad de la detención, lo que implica a su vez una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9, párrafo 3, del Pacto⁹.

56. El Grupo de Trabajo constató, por la información recibida que no fue disputada por el Gobierno, que la Sra. Coppens Zamora fue detenida el 10 de septiembre de 2018, en la ciudad de León, durante una redada a una vivienda ubicada en el barrio de la iglesia la Recolectión. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el arresto fue ejecutado por varias personas armadas vestidas de civil, muchas de ellas encapuchadas, a la par de policías uniformados.

57. El Grupo de Trabajo fue persuadido de que, durante el arresto, los agentes no presentaron ninguna orden de autoridad competente, ni de captura o de allanamiento, y que la detención no se debió a que la Sra. Coppens Zamora estuviera cometiendo un delito en flagrancia, ni que se hubiera ejecutado inmediatamente después de haberlo cometido o durante una persecución en caliente.

58. El Grupo de Trabajo fue convencido de que la Sra. Coppens Zamora fue presentada ante un juez una semana después de la detención y no con posterioridad a las 48 horas siguientes a su detención. En ese sentido, el Grupo de Trabajo constató que la audiencia preliminar se celebró una semana después de la detención.

59. El Grupo de Trabajo fue convencido por medio de la información recibida de que la familia de la Sra. Coppens Zamora tuvo conocimiento de la detención un día después de que esta tuviera lugar y que estuvo incomunicada durante los nueve días siguientes, con lo que no se le garantizó la posibilidad de comunicarse con su abogado ni con su familia, en contravención de lo dispuesto en el artículo 9 del Pacto.

60. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que la detención de la Sra. Coppens Zamora fue arbitraria conforme a la categoría I de sus métodos de trabajo.

Categoría II

61. El Grupo de Trabajo destaca que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende el derecho a difundir información e ideas de toda índole, sea oralmente o por cualquier otra forma. Además, el Grupo también reitera que el ejercicio de ese derecho puede estar sujeto a restricciones, expresamente fijadas por la ley y necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública¹⁰.

62. Para el Grupo de Trabajo la libertad de opinión y de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas¹¹. Ambas libertades son la base para el ejercicio efectivo de una amplia gama de derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la participación política, contenidos en los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 del Pacto¹².

63. La libertad de expresión es de tal importancia, que ningún gobierno puede conculcar otros derechos humanos por las opiniones de naturaleza política, científica, histórica, moral,

⁸ Véanse las opiniones núm. 13/2019, párr. 53; núm. 9/2018, párr. 38; núm. 36/2017, párr. 85; núm. 53/2014, párr. 42; núm. 46/2012, párr. 30; núm. 67/2011, párr. 30; núm. 61/2011, párrs. 48 y 49. Véase también E/CN.4/2003/8/Add. 3, párrs. 39 y 72 apdo. a).

⁹ Opinión núm. 53/2016, párr. 47.

¹⁰ Opinión núm. 58/2017, párr. 42.

¹¹ Observación general núm. 34, párr. 2.

¹² *Ibid.*, párr. 4.

religiosa o de cualquier tipo, efectuadas o atribuidas a una persona. En consecuencia, no es compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto calificar como delito la expresión de una opinión, ni tampoco es permisible que una persona sea acosada, intimidada o estigmatizada, detenida, o sujeta a prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión, en razón de sus opiniones¹³.

64. Por la información recibida, el Grupo de Trabajo fue convencido de que la Sra. Coppens Zamora es una defensora de derechos humanos y líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de León, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, y de que participó en las protestas, paros y acciones cívicas de abril, mayo y junio de 2018.

65. El Grupo de Trabajo fue convencido de que la Sra. Coppens Zamora ha expresado abiertamente críticas al Gobierno a través de protestas, paros y acciones cívicas, y de que ha trabajado en favor del movimiento estudiantil de la primavera de 2018. El Grupo de Trabajo también fue convencido de que la detención de la Sra. Coppens Zamora se hizo con el objeto de silenciar dichas opiniones, expresiones, reuniones y protestas.

66. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que la detención de la Sra. Coppens Zamora se efectuó en contravención de los derechos fundamentales a la libertad de opinión, asociación, reunión pacífica y a la libertad de expresión, garantizados en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19, 21 y 22 del Pacto, lo que la hace arbitraria conforme a la categoría II de sus métodos de trabajo.

Categoría III

67. En vista de los hallazgos efectuados con arreglo a la categoría II, por la que se concluyó que la detención es el resultado del ejercicio de los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión y protesta pacífica, el Grupo de Trabajo consideró que no hay bases proporcionales que justifiquen la detención preventiva y el juicio. Sin embargo, en vista de que hubo un juicio y que la Sra. Coppens Zamora pudo haber sido sancionada con penas de prisión potencialmente altas, considerando las alegaciones de la fuente y la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo procederá a analizar si durante el curso de dicho procedimiento judicial se han respetado elementos fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial.

68. Como se señaló anteriormente, el Grupo de Trabajo fue convencido de que durante la detención de la Sra. Coppens Zamora no se respetaron los derechos de ser informada sin demora de las causas de la detención, ser notificada sin demora de la orden de detención en su contra, no ser incomunicada, ser presentada sin demora ante un juez y acceder a un tribunal para que verifique la legalidad de la detención, en contravención de lo dispuesto en el artículo 9 del Pacto.

Presunción de inocencia

69. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11, párrafo 1, y el Pacto en su artículo 14, párrafo 2, reconocen el derecho de toda persona acusada de un delito a que se le presuma su inocencia. Ese derecho impone una serie de obligaciones a cargo de todas las instituciones del Estado de que el acusado sea tratado como inocente hasta que se haya dictado sentencia más allá de toda duda razonable.

70. Para el Grupo de Trabajo, al igual que para el Comité de Derechos Humanos, ese derecho obliga a todas las autoridades públicas, incluidas las del Poder Ejecutivo, a no prejuzgar el resultado de un juicio, lo que implica abstenerse de hacer declaraciones públicas que afirmen la culpabilidad del acusado¹⁴.

71. Aún más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

¹³ *Ibid.*, párr. 9.

¹⁴ Observación general núm. 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 30. Véase también, *Kozulina c. Belarús* (CCPR/C/112/D/1773/2008), párr. 9.8.

El derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades públicas, por lo cual estas deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada¹⁵.

72. El Grupo de Trabajo ha determinado que las inferencias públicas que condenan abiertamente a los acusados antes de la sentencia vulneran la presunción de inocencia y constituyen una intrusión indebida que afecta a la independencia y la imparcialidad del tribunal¹⁶.

73. El Grupo de Trabajo ha reiterado que las declaraciones públicas de funcionarios violan el derecho a la presunción de inocencia de una persona cuando esta es señalada como responsable de un delito por el que aún no ha sido juzgada, y con ello pretenden convencer al público de su responsabilidad, así como por prejuzgar la valoración de los hechos por la autoridad judicial competente¹⁷.

74. El Grupo de Trabajo recibió información convincente por la fuente que se hizo del conocimiento del Gobierno de Nicaragua, la cual no fue refutada, en la que se constata que diversas autoridades del país le dieron trato de condenada a la Sra. Coppens Zamora, cuando procedimentalmente no se había iniciado el juicio oral y público, así como también que dichas autoridades, a través de los medios, la expusieron y exhibieron públicamente como una delincuente, en contravención de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

Tribunal competente, imparcial e independiente

75. Según el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, toda persona tendrá derecho a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal en su contra. El Grupo de Trabajo considera que el requisito de imparcialidad exige que los jueces no deben permitir que su fallo se vea influido por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto bajo su consideración, o comportarse de forma que promueva intereses de las partes. Asimismo, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable¹⁸.

76. En ese contexto, el Grupo de Trabajo, en su jurisprudencia reiterada ha considerado que el enjuiciamiento criminal de personas acusadas por delitos cometidos en un determinado territorio, por parte de tribunales ubicados en otra jurisdicción, constituye una violación del derecho a ser juzgado por el juez competente o natural, cuando la legislación nacional le atribuye expresamente la competencia a la jurisdicción de la localidad donde se cometió el supuesto delito¹⁹.

77. Por la información recibida, que no fue refutada por el Gobierno de Nicaragua, el Grupo de Trabajo fue convencido, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 45 anterior, de que conforme a la legislación nacional el tribunal competente de un delito es aquel en el que se cometieron los delitos imputados. De la misma forma, el Grupo de Trabajo es consciente de que el abogado defensor de la Sra. Coppens Zamora presentó una excepción

¹⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos., *Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú*, párr. 177. Asimismo véanse *Caso Tibi vs. Ecuador*, párr. 182; *Caso J. vs. Perú*, párrs. 244 a 247. En términos similares, véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Allenet de Ribemont c. France*, párr. 41; *Daktaras v. Lithuania*, párr. 42; *Petyo Petkov v. Bulgaria*, párr. 91; *Peša v. Croatia*, párr. 149; *Gutsanovi v. Bulgaria*, párrs. 194 a 198; *Konstas v. Greece*, párrs. 43 y 45; *Butkevicius v. Lithuania*, párr. 53; *Khuzhin and Others v. Russia*, párr. 96; *Ismoilov and Others v. Russia*, párr. 161.

¹⁶ Opiniones núm. 90/2017, núm. 76/2018 y núm. 89/2018.

¹⁷ Véanse las opiniones núm. 6/2019 y núm. 12/2019.

¹⁸ Observación general núm. 32, párr. 21.

¹⁹ Opiniones núm. 30/2014, párr. 51; núm. 28/2014, párr. 46; núm. 1/2015, párrs. 31 y 34; núm. 6/2019, párr. 135; y núm. 12/2019, párr. 121.

por falta de competencia del tribunal de Managua, es decir por violación al derecho al juez natural, que correspondería a los tribunales de León. Sin embargo, dicha excepción fue negada, sin que el Grupo de Trabajo recibiera información por parte del Gobierno que justificara que la decisión de la audiencia pública del 17 de octubre de 2018(párrafo 27 *supra*), se hizo de acuerdo con el derecho internacional aplicable. Por consiguiente, a juicio del Grupo de Trabajo, el tribunal que conoció del asunto de la Sra. Coppens Zamora no era el competente, por lo que se violó el derecho a ser juzgada por el juez natural, en contravención a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

Medios y tiempo suficiente para preparar su defensa

78. El Grupo de Trabajo desea recordar que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causa de los cargos presentados en su contra, así como a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección²⁰. El Grupo de Trabajo desea enfatizar que la persona acusada tiene derecho a ser asistida o defendida por un abogado de su elección²¹.

79. Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo considera que el derecho a ser informado sin demora de la naturaleza y cargos presentados en su contra, puede satisfacerse verbalmente, siempre y cuando más adelante se confirme por escrito, a condición de que en la información se precise la legislación aplicable, así como los supuestos hechos en los que se fundamenta la acusación²².

80. Por lo que se refiere al derecho a contar con un abogado defensor, así como con el tiempo y medios adecuados para su defensa, el Grupo de Trabajo es de la opinión de que las personas acusadas deben contar con tiempo y medios apropiados para ello, lo que implica que deben estar posibilitados para tener pronto acceso a los abogados y comunicarse de manera privada en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones²³, con tiempo suficiente para preparar su defensa²⁴, así como acceso al expediente en el que aparezcan todos los documentos, pruebas y otros materiales que la acusación tenga previsto presentar ante el tribunal²⁵.

81. Además, en opinión del Grupo de Trabajo:

El fundamento de hecho y de derecho de la detención se debe comunicar al detenido y/o su representante sin demora a fin de que tenga tiempo suficiente para preparar la impugnación. La comunicación comprende una copia de la orden de detención, el acceso al expediente y una copia de él, además de la divulgación de cualquier material en poder de las autoridades o al que puedan tener acceso en relación con los motivos de la privación de libertad²⁶.

82. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el abogado defensor de la Sra. Coppens Zamora no tuvo acceso a su representada desde el momento de la detención el 10 de septiembre de 2018, particularmente cuando estuvo privada de libertad bajo el régimen de incomunicación como se pudo constatar anteriormente, ni tampoco durante la primera comparecencia celebrada el 18 de septiembre de 2018, lo que contraviene los derechos de toda persona a ser asistida por un abogado de su elección y a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, reconocidos en los apartados b) y d) del artículo 14 del Pacto.

²⁰ Artículo 14, párr. 3, apdos. a) y b), del Pacto.

²¹ Artículo 14, párr. 3, apdo. d), del Pacto.

²² Observación general núm. 32, párr. 31.

²³ *Ibid.*, párr. 34.

²⁴ *Ibid.*, párr. 32.

²⁵ *Ibid.*, párr. 33.

²⁶ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), directriz 5 (Derecho a ser informado), párr. 56.

Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas

83. El Pacto reconoce también el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin dilaciones indebidas²⁷. El Grupo de Trabajo, de conformidad con el Comité de Derechos Humanos, considera que las dilaciones en los procedimientos penales solo pueden justificarse por la complejidad del caso o el comportamiento de las partes, de lo contrario esas demoras son incompatibles con el Pacto y comprometen la imparcialidad de un juicio²⁸.

84. Por la información suministrada por la fuente que no fue refutada por las autoridades de Nicaragua, el Grupo de Trabajo fue convencido de que la reprogramación de las diversas audiencias —por mencionar algunas, las programadas el 10 de diciembre de 2018, el 3 de enero de 2019, el 28 de febrero de 2019, el 1 de abril de 2019— se dio por causas atribuibles a las autoridades, sin que se hubieran justificado por la complejidad del caso, ni tampoco por la actuación de la Sra. Coppens Zamora en su calidad de acusada. Ello implica una actitud injustificada de las autoridades, en detrimento del derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, en contravención de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

85. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que se vulneraron parcialmente las garantías de la Sra. Coppens Zamora a un juicio justo previstas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como 9 y 14 del Pacto, lo que hace que la detención sea arbitraria conforme a la categoría III de sus métodos de trabajo.

Categoría V

86. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el arresto y la detención de la Sra. Coppens Zamora constituyen un caso ilustrativo del patrón de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en el marco de las protestas pacíficas que empezaron el 18 de abril de 2018. De la misma forma, se pudo constatar que su detención se debía principalmente a tratarse de una líder del movimiento estudiantil crítico de las políticas del gobierno.

87. El Grupo de Trabajo desea recordar que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos encontró que entre las violaciones a los derechos humanos documentadas a partir de abril de 2018 se encuentran:

El uso desproporcionado de la fuerza por parte [de] la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno²⁹.

88. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto que la represión a las protestas de abril de 2018 por parte de las autoridades nicaragienses dio como resultado la muerte de entre 198 y 325 personas; miles de personas heridas; entre 372 y 777 personas detenidas y enjuiciadas, cientos de despidos en el sector de la salud y la expulsión de cientos de estudiantes de la Universidad Nacional. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó un serio incremento en el número de solicitantes de asilo en países vecinos como consecuencia de las diversas formas de

²⁷ Artículo 14, párr. 3, apdo. c), del Pacto.

²⁸ Observación general núm. 32, párr. 27.

²⁹ Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el Contexto de las Protestas en Nicaragua (18 de abril – 18 de agosto 2018)*, págs. 7 y 8. Puede consultarse en: www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf.

persecución que se han dado en el país contra manifestantes, opositores, estudiantes, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos³⁰.

89. De la misma forma el Grupo de Trabajo observa que la detención acreditada en el presente caso no es la primera que se lleva a cabo por las autoridades de Nicaragua, en contra de personas que expresan críticas sobre la actuación de las autoridades o han participado en protestas sociales³¹.

90. En virtud de lo anterior, la privación de libertad de la Sra. Coppens Zamora constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en la discriminación por su opinión política, así como por su participación en protestas y acciones sociales, además de su posición de liderazgo en el movimiento estudiantil, lo cual contraviene los artículos 2 y 26 del Pacto y los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que se considera que la detención es arbitraria conforme a la categoría V de los métodos de trabajo.

91. Sobre la base de la información recibida relativa a las condiciones de detención de la Sra. Coppens Zamora, por ejemplo la falta de atención médica, así como a las alegaciones de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Grupo de Trabajo, conforme al párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

92. Finalmente, y con el objeto de que el Grupo de Trabajo pueda entablar un diálogo directo con las autoridades correspondientes a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), los representantes de la sociedad civil y las personas detenidas, con miras a lograr una mayor comprensión de la situación de privación de la libertad en el país, el Grupo de Trabajo sugiere que el Gobierno considere favorablemente permitirle llevar a cabo una visita al país, tal como lo requirió en sus notas verbales del 24 de abril y 21 de noviembre de 2018. El Grupo de Trabajo desea recordar que desde el 26 de abril de 2006 el Gobierno de Nicaragua extendió una invitación abierta a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, y que la última vez que visitó el país fue del 15 al 23 de mayo de 2006³².

Decisión

93. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Amaya Eva Coppens Zamora es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 11, 19, 20, 21 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 17, 18, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

94. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Coppens Zamora sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

95. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder a la Sra. Coppens Zamora el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

96. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de

³⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe Anual 2018*, capítulo IV. B. Nicaragua, párr. 13. Puede consultarse en: www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.4B.NI-es.pdf.

³¹ Opiniones núm. 19/2019 y núm. 16/2019.

³² A/HRC/4/40/Add.3.

libertad de la Sra. Coppens Zamora y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

97. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

98. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

99. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la Sra. Coppens Zamora;
- b) Si se ha investigado la violación de los derechos de la Sra. Coppens Zamora y, de ser así, el resultado de la investigación;
- c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Nicaragua con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- d) Si se han eliminado todos los registros criminales de la Sra. Coppens Zamora referidos en la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

100. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

101. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

102. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado³³.

[Aprobada el 14 de agosto de 2019]

³³ Véase la resolución 33/30 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.

Anexo

Opinión individual de Sètondji Roland Adjovi (parcialmente disidente)

1. El mandato del Grupo de Trabajo en relación a una queja individual es determinar si, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, la situación que se le presenta constituye una detención arbitraria bajo una de sus cinco categorías. En este contexto, la cuestión de la competencia del tribunal nacional puede ser relevante como un elemento del derecho a un juicio justo. El Grupo de Trabajo se ha pronunciado repetidamente respecto a este tema.
 2. Sin embargo, no creo que el Grupo de Trabajo pueda pronunciarse sobre este asunto en todos los casos sometidos a su conocimiento.
 3. En el presente caso, la fuente planteó la cuestión de la jurisdicción territorial alegando que el tribunal nacional en cuestión no tendría jurisdicción en virtud del derecho interno. En efecto, el Gobierno no ha respondido a este alegato y, como es la práctica, el Grupo de Trabajo debe considerar como válidos los alegatos *prima facie* creíbles presentados por la fuente, tal y como lo ha hecho la mayoría en el presente caso (véase el párrafo 77). No obstante, en el presente caso ello implicaría ignorar el riesgo incurrido en términos de racionalidad de la decisión, porque el argumento es una cuestión de derecho interno y su validez es un asunto objetivo en el cual el silencio del Gobierno no necesariamente conduce a una apreciación favorable del argumento de la fuente. En mi opinión, la falta de una respuesta del Estado no hace que la alegación sea más creíble y no cuenta con la experticia para efectuar una evaluación interna de la legislación nacional.
 4. Además, el Grupo de Trabajo ya ha llegado a una conclusión suficientemente fuerte de la violación del derecho a un juicio justo, de modo que esta conclusión adicional no me parece esencial para la decisión.
 5. En estas circunstancias y exclusivamente en este punto, lamento no poder asociarme con la opinión de la mayoría.
-